

El Sahara Occidental: un conflicto sin resolver

Ignacio Fuente Cobo

El Sahara Occidental fue territorio español hasta febrero de 1976. La ocupación española del territorio saharauí iniciada en 1884 y confirmada por los Tratados internacionales franco-españoles de 1900, 1904 y 1912, respondió a un principio geopolítico básico: el de evitar que ninguna potencia europea tuviese el control físico de un territorio como el saharauí, situado enfrente de las costas españolas de las Islas Canarias.



Los antecedentes del conflicto

En marzo de 1956, se firmó en París el acuerdo por el que finalizaba el protectorado de Marruecos, reconociendo España la inde-

pendencia de esta nación. Este acontecimiento fue aprovechado por el gran patriarca del nacionalismo marroquí y jefe del partido Istiqlal, Allal-el-Fassi, para publicar su mapa del gran Marruecos «de Tánger al Senegal», donde establecía lo que, en su opinión, debían constituir las fronteras políticas del nuevo reino de Marruecos. Se trataba de una amplísima porción del África occidental que incluía parte de Argelia y Malí, y la totalidad del Sahara Occidental y Mauritania, hasta los confines del río Senegal donde empezarían los antiguos reinos negros. Este territorio abarcaba además del Sahara Español, Mauritania, el Tuat Argelino y territorios de Malí hasta Tombuctú. El territorio incluía importantes yacimientos de minerales como el carbón de Kenadsa, los hidrocarburos de In Salah, el manganeso de Yebel Guettara, el hierro de Bechar y Tinduf, todos ellos en Argelia bajo dominio francés; el hierro de Zueratt y el cobre de Akjoujt en Mauritania y los fosfatos del Sahara Español.

La justificación más mitológica que histórica se hallaba en el efímero reino almorávide creado por Yusuf Ibn Tasfin en el siglo XI, quien partiendo del interior del Sahara y al frente de un ejército de monjes-soldados, conquistó el te-

ritorio del actual Marruecos, fundando Marrakech, ciudad que daría nombre al reino. Asumido como ideario político de la nueva monarquía alauita, la política marroquí se basará desde entonces y hasta nuestros días, en el diseño de estrategias que permitan la incorporación progresiva de estos territorios a la soberanía de Marruecos, en una auténtica «operación de amalgama», en la cual se mezclan territorios cuya marroquinidad es indiscutible como Ifni o Tánger, con otros cuya pertenencia a Marruecos resulta históricamente insostenible como Mauritania, Ceuta y Melilla, parte de Argelia, las Islas Canarias o el Sahara Occidental.

Con la firma el 1 de abril de 1958 de «Los Acuerdos de Cintra», España cometió el error de entregar a Marruecos la región de Tarfaya hasta el paralelo 27°40', una zona históricamente saharauí y, por tanto, más allá de lo que habían sido las fronteras naturales del reino alauita. Se pensaba erróneamente que esta cesión permitiría aplacar las ambiciones expansivas territoriales de Marruecos.

Durante los años sesenta, España fomentó el desarrollo económico del Sahara atrayendo a numerosos trabajadores y funcionarios europeos que pasaron de 1.700 en

1957 a más de 20.000 a principios de los años 70¹. Igualmente, a partir de 1961, se empezó a explorar el territorio en busca de petróleo, a través de un cartel formado al 50% por el gobierno español y un consorcio de 11 compañías petrolíferas, de manera que al cabo de tres años se habían encontrado indicios de crudo en 27 puntos distintos. No obstante, el descubrimiento en esta época de yacimientos muy rentables en Libia y el Mar del Norte, los bajos precios de crudo y la incertidumbre que existía sobre el futuro del Sahara controlado por España llevaron a que, poco a poco, fueran abandonándose las prospecciones. Treinta años después, las recientes concesiones por parte de las autoridades marroquíes de permisos de prospección petrolera «off-shore» a dos compañías extranjeras, la francesa Total-FinaElf y la estadounidense Kerr-McGee, parecen confirmar la sospecha de que el Sahara encierra vastos yacimientos de hidrocarburos, lo que aumenta sensiblemente la importancia geopolítica de este territorio.

En mayo de 1973, militantes nacionalistas saharauis fundaron el

¹ El censo español de 1974 indica un número de europeos de 20.176, a los que hay que sumar una cantidad variable, siempre superior a varios miles, de soldados de reemplazo.

Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), con un programa de corte socialista y panárabe basado en la lucha armada y tomando como modelo el de la revolución argelina. Sus miembros eran fundamentalmente trabajadores de las minas y de la construcción de pistas, soldados y sub-

*en 1956, año de la
independencia de
Marruecos, el partido
Istiqlal publicó su mapa del
gran Marruecos «de Tánger
al Senegal»*

oficiales de la Agrupación de Tropas Nómadas, algunos policías y funcionarios al servicio de la administración española, y unos pocos chiujs o dirigentes políticos tradicionales. En general, sus afiliados se correspondían con las personas más desarrolladas culturalmente y más sensibilizadas con el futuro del territorio.

Durante los años siguientes, y hasta la salida de los españoles, el Sahara Occidental se convirtió en el escenario de una guerra de guerrillas contra las fuerzas militares españolas que tuvieron en los enfrentamientos una decena de muertos, frente a un número in-

determinado pero probablemente muy superior de bajas saharauis. De todos modos, puede decirse que el carácter de los combates contra el Frente Polisario, revistió para el Ejército de operaciones español, desplegado en el territorio saharauí, un carácter secundario, no demasiado grave, pensando que era el precio que había que

al anunciar, en 1974, su intención de convocar un referéndum en el Sahara, España reconoció los derechos de sus habitantes

pagar para contribuir a la acción política que desembocase en una independencia amistosa. Las autoridades españolas eran plenamente conscientes de que el peligro real estaba en la cada vez más evidente posibilidad de un enfrentamiento militar con las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, habida cuenta la política anexionista de su monarquía.

En el terreno diplomático, el 20 de agosto de 1974, el embajador español ante Naciones Unidas, Jaime de Pinies, anunció la intención del gobierno español de celebrar un referéndum dentro de los seis primeros meses de 1975 y, a tal efecto, comenzó los trabajos de

elaboración de un censo de la población del territorio. De esta manera, España reconocía que su única preocupación era que se respetasen los deseos de la población, rechazando así la idea de una eventual integración del Sahara en cualquiera de los Estados vecinos.

Ante esta situación desfavorable a sus tesis, el monarca marroquí Hassan II hizo público, el 17 de septiembre de 1974, en una multitudinaria rueda de prensa su intención de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en busca de una sentencia sobre la situación del Sahara, lo que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 3292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974, por 87 votos a favor, ninguno en contra y 43 abstenciones.

Con vistas a conseguir el apoyo para sus tesis de países vecinos, se produjo el hecho histórico del cambio de actitud de Marruecos hacia Mauritania al ofrecerle, la partición del territorio a cambio de su asociación en la solución del litigio. Esta declaración suponía que Marruecos renunciaba así, de forma implícita, a las reivindicaciones territoriales sobre el país vecino. La aceptación mauritana, reforzó la posición marroquí, ais-



lando a Argelia, principal avalista de las tesis independentistas. La razón de esta aceptación mauritana era esencialmente táctica: el reparto del Sahara, aunque Marruecos se adjudicase la parte del león, permitiría mantener todavía una zona tapón entre ambos países, al tiempo que la alianza con Marruecos afirmarí la autonomía y legitimidad del país frente a la «protección» argelina.

El 16 de octubre de 1975, casi un año después de que se le hubiera planteado la cuestión del Sahara, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya hizo público su dictamen, estableciendo taxativamente que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sahara Occidental por una parte y el reino de Marruecos o el Conjunto Mauritano, por otra. La única concesión que hacía la Corte, era la de admitir cierta autori-

dad que el Sultán de Marruecos había podido ejercer sobre algunas tribus del territorio, que nomadeaban en el interior de Marruecos. Con respecto a Mauritania, la conclusión era similar y la relación se limitaba a ciertos lazos de vecindad que el nomadismo había establecido entre las tribus a uno y otro lado de la frontera.

El día 16 de octubre de 1975, unas horas después de haberse hecho público el dictamen del Tribunal, Hassan II se dirigía a la nación para anunciar que la Corte había afirmado la existencia de vínculos jurídicos y de sumisión entre la población del Sahara y el reino de Marruecos. Silenciando la parte del dictamen que negaba todo lazo de soberanía territorial entre el reino alauita y el Sahara Occidental, el monarca marroquí estimaba que no había diferencia

entre la soberanía territorial y los lazos jurídicos y de sumisión, señalando la importancia de esta noción en el derecho islámico. En consecuencia, Hassan II comunicaba que no les quedaba más que recuperar «su» Sahara, cuyas puertas se les habían abierto. La recuperación se haría de una forma pacífica mediante una marcha civil de 350.000 voluntarios, la «Marcha Verde», que solamente irían armados con el Corán.

*en 1975, el Tribunal
Internacional de La Haya
dictaminó que no existía
ningún vínculo de soberanía
territorial entre el Sahara
Occidental, por una parte, y
Marruecos o Mauritania,
por otra*

Las autoridades marroquíes eran muy conscientes de la debilidad política interna en la que se encontraba el gobierno español, en unos momentos en los que el Jefe del Estado, estaba agonizando en Madrid, lo que abría un periodo de gran incertidumbre en el curso de los acontecimientos políticos en España, del cual Marruecos podía sacar una ventaja decisiva con vistas a hacer avanzar sus rei-

vindicaciones territoriales. De esta manera y con vistas a evitar una nueva «Guerra de África» que tan malos recuerdos levantaba en el subconsciente nacional, el gobierno español decidió, en los denominados «Acuerdos de Madrid», entregar la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania y abandonarlo completamente para el 28 de febrero del año siguiente. Marruecos se quedó con el norte del territorio donde estableció tres provincias, Aaiun, Smara y Bojador, nombrando en cada una de ellas un gobernador en una organización administrativa similar a la del resto del reino. Por su parte, Mauritania se quedó con la parte sur, a la que denominó Tiris El Gharbia, levantando en ella una administración común con la mauritana, que comprendía tres departamentos: Dajala (Villa Cisneros), Auserd y Aargub. Por su parte Güera, en la península del Galgo, fue unida al departamento vecino de Nuadibú.

Las negociaciones y acuerdos de Madrid supusieron un triunfo de las tesis marroquíes, después de haber sido desechadas éstas en sucesivos foros internacionales. Porque lo que se negoció en Madrid fue sencillamente la entrega del Sahara, con la participación de Mauritania y la exclusión de

Argelia y, sin tener en cuenta para nada la voluntad del pueblo saharauí, cuyos derechos estaban representados por España.

Para la población saharauí agrupada en torno al Frente Polisario, la entrega a Marruecos y Mauritania supuso un duro golpe y el comienzo de un largo conflicto contra las nuevas potencias ocupantes que durará hasta nuestros días. En la noche del 27 al 28 de Febrero de 1976, el Congreso Nacional Saharauí, máxima representación de la voluntad popular, proclamó, por boca de su Secretario General Ali Beiba, la creación de la República Árabe Saharauí Democrática (RASD) en Bir Lehlu, un campamento en el desierto a 130 kilómetros de la frontera argelina lanzándose, a continuación, a la lucha armada contra las nuevas potencias ocupantes.

Militarmente, el Frente Polisario fue siempre consciente de que su fuerza era insuficiente para poder alcanzar la independencia frente a dos Estados, Marruecos y Mauritania, mucho más fuertes, y de la imposibilidad de combatir contra sus dos enemigos simultáneamente y en varios frentes. Colocado en una clara posición de desventaja, el Frente Polisario diseñó una inteligente estrategia que consistió en concentrar sus ataques sobre el enemigo más débil,

Mauritania, al tiempo que adoptó una política militar más contenida frente a Marruecos. Como consecuencia de las continuas derrotas militares, se produjeron en Mauritania sucesivamente los golpes de Estado de 10 de julio de 1977, de 20 de marzo del año siguiente y, finalmente, del 6 y 31 de abril de 1978, que desembocaron el 5 de agosto de 1979 en la firma de un acuerdo de paz entre el Frente Polisario y el gobierno mauritano. En dicho acuerdo, Mauritania se comprometió a poner fin a su ocupación de la parte del Sahara que le había correspondido y a entregarla al Frente Polisario antes del 5 de marzo de 1980.

La respuesta marroquí ante lo que consideraba una capitulación mauritana y una traición a los compromisos derivados de los Acuerdos de Madrid fue contundente y consistió en la ocupación de la zona mauritana alegando un original derecho de retracto: si Mauritania renunciaba a la parte que le había correspondido en los Acuerdos de Madrid, el otro pretendiente con «mejor derecho», Marruecos, podía legalmente ocuparlo. El 14 de agosto, Dajala, la antigua Villa Cisneros pasó a ser la capital de la nueva provincia marroquí de Río de Oro que comprendía toda la zona que había pertenecido a Mauritania.

Ignacio Fuente Cobo



Durante los años siguientes y hasta el alto el fuego, marroquíes y polisarios se enfrentaron militarmente en el Sahara siguiendo dos tipos distintos de estrategias. Una polisarria basada en aprovechar las características de la guerra en el desierto, consistentes en combinar adecuadamente la movilidad, la sorpresa y el buen conocimiento del terreno. Y otra marroquí, que

consistía fundamentalmente en llevar a cabo una guerra defensiva, centrada en la protección de los núcleos de población más importantes y en porciones crecientes del territorio saharauí.

Conforme con este modelo defensivo y durante ocho años (1980-89), Marruecos hizo un gran esfuerzo para levantar un conjunto

de muros cuya longitud total superó los 1.000 kilómetros. Su finalidad militar era la de alejar cada vez más de su territorio la amenaza saharauí y limitar, al mismo tiempo, las pérdidas humanas de las FAR, que se sentían amparadas por la solidez de su construcción. Como contrapartida, los muros supusieron un enorme costo militar y humano para Marruecos y una enorme sangría para los limitados recursos financieros del país.

En 1988, agotados después de 12 años de guerra ininterrumpida en el desierto, tanto el Frente Polisario como las Fuerzas Armadas Reales, llegaron al convencimiento de que no era posible obtener una victoria militar decisiva sobre el otro adversario, lo que abrió la posibilidad de llegar a una paz duradera, encaminada a través de un proceso de negociación política.

El 2 de mayo el Secretario General de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, obtuvo de Rabat y del Frente Polisario la aceptación de la celebración del referéndum sobre el futuro del Sahara, empleando, como base para el mismo, el censo que habían realizado los españoles en 1974, si bien Marruecos se opuso al resto de las condiciones exigidas por el Polisario, principalmente la retirada de la administración y de las FAR marroquíes. De esta manera, la

Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó, el 22 de noviembre de 1988, la resolución 43/33 por la que se reafirmaba el derecho del pueblo saharauí a la autodeterminación y a la independencia, y se pedía a las partes en conflicto negociaciones directas para llegar a un alto el fuego y crear las condiciones para la consulta.

Tres años después, el 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 690 aprobó establecer bajo la autoridad del Secretario

*desde que, en 1991, el
Consejo de Seguridad lanzó
la Misión de la ONU para el
referéndum hasta hoy, el
proceso de paz ha sufrido un
continuo deterioro*

General la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). A partir de esta fecha debía comenzar un periodo de transición que terminaría con la proclamación de los resultados, cuyas opciones se limitaban a dos: la independencia saharauí, o su integración en Marruecos.

Situación actual y perspectivas

Desde esta fecha y hasta nuestros días, el proceso de paz ha ido sufriendo un continuo deterioro,

hasta el punto de que no ha sido posible la realización del referéndum, inicialmente por falta de acuerdo entre las partes en lo que respecta al número de electores que deberían participar en el mismo y, últimamente, por falta de voluntad política por parte de Marruecos para llevarlo a cabo.

Puede decirse que Marruecos es consciente de su superioridad militar y de que el tiempo juega a su favor al consolidar una situación

su condición de «aliado preferente no OTAN» de los Estados Unidos ha reforzado considerablemente las tesis marroquíes

de hechos consumados ventajosa, ante un Frente Polisario en continua decadencia, y cuya capacidad militar se ha deteriorado hasta el punto de que, hoy en día, puede considerarse militarmente inoperante. Es por ello por lo que la estrategia marroquí ha ido apostando durante los últimos años por una posición de bloqueo frente a los sucesivos planes de paz de Naciones Unidas.

De esta forma, en marzo de 1997, el Consejo de Seguridad decidió ante la situación de estancamiento que sufría el proceso de paz y las

presiones cada vez más fuertes de retirada de la MINURSO, nombrar al norteamericano James Baker como Representante Especial del Secretario General Kofi Annan. Se esperaba que su prestigio personal y sus estrechos lazos con la administración norteamericana en la que había sido Secretario de Estado, fueran suficientes para hacer avanzar definitivamente el proceso de paz. Su propuesta inicial conocida como Acuerdo Marco, o Plan Baker, se decantaba por la autonomía del Sahara dentro de Marruecos, que incluiría la convocatoria en cinco años de un referéndum final que, probablemente, confirmaría la soberanía marroquí. Este plan, coincidía en el fondo con las tesis marroquíes anticipadas por el rey Hassan II en una entrevista publicada por el diario francés *Le Monde* el 3 de Agosto de 1997. Por ello fue rechazado por el Frente Polisario.

A la vista de esta situación, el Secretario General propuso el 19 de febrero de 2002 al Consejo de Seguridad cuatro posibles vías para una solución definitiva:

* Puesta en práctica del Plan de Arreglo de 1991 y convocatoria de un referéndum (rechazado por Marruecos).

* División del territorio entre Marruecos y el Frente Polisario sobre

los límites establecidos en 1975, para los territorios administrados por Marruecos y Mauritania (rechazado por ambos).

* Aplicación del Plan Baker de autonomía saharauí dentro de Marruecos (rechazado por el Polisario).

* O, finalmente, retirada de la MINURSO con posible desestabilización de la región (rechazado por el Consejo de Seguridad).

La imposibilidad de llegar a acuerdo alguno entre las partes, que supusiera la aceptación de alguna de estas vías, llevó al Representante Especial, James Baker, a proponer en enero de 2003, un nuevo *Acuerdo Marco de Autonomía Modificada*. Según este plan para la autodeterminación del Sahara, se partiría de un proceso previo de elecciones autonómicas en el que se elegirían lo que las Naciones Unidas denominaban «Autoridad del Sahara Occidental», que se repartiría con el Reino de Marruecos las competencias sobre la antigua colonia. Los votantes serían sólo los saharauis identificados como tales por la Comisión de Identificación de la MINURSO y los saharauis refugiados en países vecinos, incluidos en el censo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). En total unos 84.000 electores.

Posteriormente y, no antes de cuatro años y no después de cinco, se celebraría el demorado referéndum de autodeterminación. En el mismo participarían además de los anteriores, los colonos marroquíes que hubieran residido permanentemente en el Sahara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999 y que tras varias décadas de colonización marroquí, alcanzarían a más de 250.000 personas. Con esta propuesta se buscaba, por tanto, satisfacer las aspiraciones de ambas partes en conflicto.

Aunque los saharauis presentaron algunas reticencias, curiosamente los mayores obstáculos al nuevo Plan de Paz fueron planteadas por Marruecos, que entendía que el Acuerdo Marco se había transformado, de un acuerdo político que aseguraba la soberanía marroquí, en «un proyecto separatista en las doradas arenas del Sahara» (semanario *Al Ayam*). Igualmente, la concesión de una autonomía tan amplia a «las provincias del Sur» podría convertirse en el detonante de una cascada de peticiones similares en otras regiones, principalmente en el conflictivo Rif. Por ello Marruecos propuso como solución única, en un retorno a su tradicional estrategia dilatoria, que tan buenos resultados le ha dado durante los últimos 13 años, negociar un estatuto de autonomía para el «Sahara marroquí», cuyos

límites estarían de acuerdo con las declaraciones del Ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, en Casablanca el 24 de abril de 2004, en «*la soberanía y la integridad territorial del Reino*».

A partir de esta postura intransigente, la actual estrategia marroquí se ha enfocado en conseguir el bloqueo definitivo del referéndum y la sustitución del marco de Naciones Unidas por otro propiamente regional en el que le resultaría mucho más sencillo lograr un acuerdo favorable, sobre todo si se dejase fuera del mismo al Frente Polisario. De ahí que Marruecos busque alcanzar estos objetivos por medio de una serie de acciones en varios frentes pero estrechamente relacionadas.

En primer lugar, Marruecos trata de reforzar su posición internacional por medio de la acción diplomática. En particular, intenta aprovecharse de la difícil situación por la que atraviesa en estos momentos la política exterior norteamericana como consecuencia de su actuación en Irak. La lamentable imagen que ofrecen los Estados Unidos en el conjunto del mundo árabe-musulmán, favorece el que las autoridades norteamericanas refuercen sus relaciones con Marruecos, uno de los pocos países árabes considerado como amigo en esa conflictiva región del mundo que los geopolíti-

cos definen como el «cinturón de quiebra» que se extiende desde Marrakech hasta Bangla Desh y en la que los norteamericanos se encuentran actualmente atrapados en la guerra contra el terrorismo. La reciente firma en junio de 2004 de un acuerdo de libre cambio con Rabat y la atribución a Marruecos de la condición de «Aliado preferente no OTAN» precisamente por sus esfuerzos contra el terrorismo debe interpretarse en este contexto pragmático de preferencia norteamericana por las tesis marroquíes.

Hay que tener en cuenta que los atentados terroristas de Casablanca están acentuando la percepción norteamericana sobre la fragilidad del régimen marroquí, cuya difícil situación interna puede terminar derivando en un proceso revolucionario del que los islamistas saldrían probablemente vencedores. Por ello, la integración de un Sahara más o menos autónomo pero marroquí es vista, en las actuales circunstancias, como una importante baza para el afianzamiento interno de Mohamed VI al que el propio presidente norteamericano se ha atrevido a calificar de «*dirigente visionario en el seno del mundo árabe*». Puede decirse que el Sahara está siendo utilizado por Marruecos como moneda de cambio a un eventual apoyo a las tesis norteamericanas de erradicación del te-

rorismo islámico y de transformación del mundo árabe.

Por otra parte, Marruecos actúa sobre la población saharauí del interior y del exterior con el objetivo claro de desacreditar a las autoridades polisarias. Se intenta responsabilizar al Frente Polisario de la situación de abandono en la que se encuentra la población saharauí, recluida en los campos de refugiados argelinos de Tinduf desde hace más de 25 años, y se le acusa de mantenerlos como rehenes, no permitiéndoles el retorno al territorio de administración marroquí. Las deserciones puntuales de dirigentes saharauís son aireadas por las autoridades marroquíes como la prueba más evidente de esta situación.

Finalmente, Marruecos sigue manteniendo sobre las Naciones Unidas una continua presión física, poniendo gran número de trabas administrativas al buen funcionamiento de la MINURSO. Con ello pretende forzar la actual situación de cansancio de la comunidad internacional con vistas a lograr, ante la imposibilidad de operar libremente, la retirada de la Misión. De esta manera, Marruecos alcanzaría un reconocimiento internacional implícito de su soberanía sobre el territorio saharauí por la vía de los hechos consumados.

Esta situación de bloqueo por parte marroquí no significa, no

obstante, que pueda contemplarse la posibilidad de regreso a la lucha armada por parte del Frente Polisario, a pesar de la presión de las bases para que responda con las armas. La razón se encuentra en la debilidad militar saharauí y en el limitado apoyo internacional efectivo con que cuenta hoy en día la causa saharauí, no sólo entre las potencias occidentales, sino también entre los Estados vecinos. La reciente afirmación del general Nezzar, ex ministro de defensa argelino, de que «Argelia no tiene necesidad de otro Estado en sus

el principal problema al que tiene que hacer frente el Polisario es que, en las actuales circunstancias, la causa saharauí no despierta especial pasión en la comunidad de naciones

fronteras» expresa claramente las limitaciones con las que se encuentran las autoridades polisarias a la hora de fijar sus apoyos. Si los saharauís optasen por retomar las armas, su situación podría ser asimilada a la del terrorismo islámico, y la causa saharauí se resentiría profundamente, en unos momentos en los que la comunidad internacional tiene una especial sensibilidad de rechazo ante

los conflictos armados que surgen en el seno de las sociedades musulmanas. Por ello, puede afirmarse que la única estrategia saharauí razonable pasa necesariamente por agotar todas las posibilidades de paz disponibles.

Hay que tener en cuenta que el principal problema al que tiene que hacer frente el Frente Polisario es que, en las actuales circunstancias, la causa saharauí no despierta especial pasión en la comunidad de naciones, acuciada por cuestiones mucho más candentes de la realidad internacional. Como indica el Embajador de Sudáfrica Dumisani Kumalo, uno de los principales países favorables a las tesis saharauíes en las Naciones Unidas, al Frente Polisario *«no le basta con que su causa sea justa, sino que necesita venderla mejor»*.

Puede decirse, a modo de conclusión, que el conflicto del Sahara Occidental no ha estado hasta la fecha bien gestionado ni por la diplomacia internacional de las Naciones Unidas, ni por las partes interesadas. La falta de imaginación y de voluntad de unos y otros ha conducido a una situación actual de estancamiento, potencialmente peligrosa. La dimisión del Representante Especial del Secretario General, James

Baker, en junio de 2004 y su sustitución por el diplomático peruano Álvaro de Soto revelan un cierto hastío de la comunidad internacional hacia un conflicto sobre el que nadie se atreve a aventurar una solución justa y definitiva.

No obstante lo anterior, todos los actores parecen estar de acuerdo al menos en un punto: en que resulta preferible una paz precaria aunque tenga que ser prolongada cada pocos meses en el Consejo de Seguridad, que una vuelta a la confrontación armada por parte de los contendientes. Por ello, el desarrollo a corto plazo del conflicto, pasa por la continuación de la misión de la MINURSO, probablemente más allá de febrero de 2005, fecha en que está prevista su finalización, a pesar de su elevado coste (600 millones de dólares hasta la fecha) y de su escaso éxito en realizar el plan de paz que preconizaba la Resolución 690 de 1991. Mientras tanto las Naciones Unidas deberán seguir echando mano a su proverbial imaginación y buscar un nuevo plan, o modificar el último, hasta conseguir una solución de compromiso que, al tiempo que respete los legítimos derechos de la población saharauí, sea aceptado por la comunidad internacional y aceptable para las partes. ■